

P. T. E.



PARTIDO DEL TRABAJO
PARTIDO de los TRABAJADORES

12842/10

POR LA LEGALIZACION DE TODOS LOS PARTIDOS POLITICOS

El Gobierno, constituyéndose en juez arbitrario de lo que es legalizable y no legalizable, de lo que es democrático y no lo es, ha declarado que nuestro Partido, al igual que otras fuerzas democráticas, obreras y nacionalistas, incurrirán en «ilicitud penal».

Con tal actitud discriminatoria y arbitraria de quienes no son precisamente los más indicados para acreditar una trayectoria democrática, se trata de cerrar el paso a la participación de los partidos obreros y populares en las próximas elecciones y a negarles su presencia pública y abierta en la vida política.

Semejantes criterios se hallan en total contradicción con la lucha resuelta y consecuente que el P.T.E., junto con otros partidos de la oposición, han desplegado bajo las peores condiciones del fascismo por la democracia política.

Desde el Congreso de Constitución en 1973, el P.T.E. ha luchado activa y decididamente por el restablecimiento de las libertades políticas y nacionales, que fueron arrebatadas a nuestro pueblo.

Impulsando la movilización del pueblo contra el fascismo.

Defendiendo en todo momento los principios fundamentales de la democracia política: la amnistía, la legalización de todos los partidos políticos y organizaciones sindicales, derechos de reunión, manifestación y huelga y los derechos nacionales de los pueblos de España.

Interviniendo activamente y promoviendo la creación de los diversos organismos unitarios que se oponían al fascismo...

El P.T.E. ha trabajado sin desmayo para conseguir la unidad de todas las fuerzas democráticas y forzar al Poder a negociar con el conjunto de ellas el pleno restablecimiento de la democracia política, conforme al programa de la P.O.D., y la convocatoria de unas elecciones realmente libres y constituyentes.

Tras la nueva situación creada por la victoria gubernamental y del gran capital en el Referendum, nuestro Partido, al igual que otras fuerzas obreras y nacionalistas, han aceptado participar en las elecciones reformistas para proponer las medidas que permitan una amplia y real democratización del Estado español. A raíz de los atentados fascistas de Madrid, el P.T.E. daba

UNIDOS PARA VENCER

su apoyo al Gobierno siempre que éste se comprometiera a la desarticulación de las bandas fascistas, enemigos jurados de la democracia, y a la aplicación de las medidas indispensables para un afianzamiento del proceso democrático: la amnistía total, la legalización de todos los partidos políticos y el restablecimiento de la Generalitat...

Pero no somos nosotros, ni un Gobierno democrático, quien decide hoy en España, sino un gobierno, que trata de asegurar, por vía electoral y con una apariencia democrática, el triunfo de la Alianza Popular franquista, al lado de otras posibles alianzas o coaliciones electorales, propiciadas desde el propio Poder, y que, en lugar de perseguir y desarticular a las bandas fascistas y a quienes, con entera impunidad, las mueven y financian, discrimina a la clase obrera y a todos los trabajadores y amenaza con declarar ilegales y objeto de persecución a los partidos que defienden sus intereses, violando el derecho fundamental de todo ciudadano a la libre asociación política.

Porque, ante un problema clave de la democracia en el momento actual, como es el de la legalización de todos los partidos políticos, ¿cuál es hoy la actitud del Gobierno?

Con el decreto-ley del Consejo de Ministros, mediante el cual se reforma la ley de Asociaciones políticas que regula el derecho a crear partidos y asociaciones políticas en general, se traspasa al Tribunal Supremo — nombrado a dedo por el mismo Gobierno — el poder para impedir la legalización de cualquier asociación o partido político, que antes era facultad exclusiva del Gobierno. Simplemente eso: hemos pasado de la «ventanilla al «ventanuco». Es más, la existencia de determinados partidos sigue estando sujeta al Código Penal, pueden constituir un delito penal. Con todo ello, no se ha hecho sino poner una barrera para el avance a una auténtica democracia.

Consideramos que la legalización de nuestro Partido, así como de los demás partidos, no es un problema ni legal ni administrativo, sino político. Es el problema de si se establece una democracia sin exclusiones ni restricciones o una «democracia» de la que se excluye a la clase obrera y a las masas trabajadoras, el de si las elecciones se darán en un marco democrático o de falta de libertad.

Evidentemente, las elecciones que España necesita son muy distintas a las que nos prepara el Gobierno. Lo que los pueblos de España reclaman son unas elecciones democráticas en un marco de libertades políticas y sindicales y con igualdad de oportunidades para todos.

Por el contrario, El Gobierno, al pactar con los sectores ultrareaccionarios del gran capital que impulsan y financian a las bandas fascistas — pacto que, sin duda, está forjado y explica muchas de las aparentes incongruencias de la liberación de los secuestrados —, está negando la posibilidad de unas condiciones mínimas aceptables, está sembrando de obstáculos el camino para las organizaciones políticas y sindicales de la clase obrera y del pueblo trabajador. Si hay alguien a quien se deba aplicar la «reforma» del Código Penal, son los «ultras» que se resisten a toda costa a abandonar un régimen despótico y arbitrario y los métodos fascistas. Pero no a quienes mantienen posiciones firmes en la lucha democrática y aceptan participar en las elecciones reformistas para contribuir a la consecución de un marco verdaderamente democrático.

Ante esta situación, no se puede apoyar lo que es una caricatura política de la democracia. Resulta inaceptable la actitud de quienes aplauden la «reforma» del Gobierno, o, parapetados en la «Comisión de los 10», negocian a espaldas del pueblo y aceptan sumisamente medidas arbitrarias que se oponen a los más elementales principios democráticos. Para no constituirse en cómplices de esa medida antidemocrática del Gobierno, los partidos de la «Comisión de los 10» deberían exigir la legalización de todos los partidos sin más trámite que su solicitud de inscripción en el Registro de Asociaciones. Para mostrarse consecuentes con su retórica democrática, los partidos legalizados, aprovechando los medios de que disfrutaban, tendrían que denunciar públicamente esta medida antidemocrática y discriminatoria, y, si el Gobierno no accede a tales demandas, recurrir a medidas de presión tales como dejar las mesas de negociaciones.

UNIDOS PARA VENCER

La legalización de los partidos obreros, populares y nacionalistas está seriamente amenazada, pero no es inalcanzable. El Tribunal supremo tiene el plazo de treinta días para adoptar una solución definitiva; nosotros también disponemos del mismo plazo para exigir e imponer la libertad de todos los partidos políticos sin exclusión.

Con la solidaridad democrática de todos los partidos consecuentemente democráticos y con el apoyo más decidido del pueblo, haremos posible la legalización de todas las fuerzas políticas. La clase obrera y el pueblo trabajador mostrarán su indeclinable voluntad de no quedar marginados del actual proceso político, harán sentir su voz.

EL PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA

El Partido del Trabajo de España se declara marxista-leninista y se propone instaurar el poder de los trabajadores para llevar a término la construcción del socialismo, abolir la explotación del hombre por el hombre y conseguir la sociedad sin clases, es decir, el comunismo.

En tanto que en la sociedad existen intereses de clase contrarios e irreconciliables, solamente derrocando el poder de la burguesía e instaurando el poder de los trabajadores se puede iniciar la construcción del socialismo.

Este poder será el único capaz de garantizar, por primera vez en la historia de la humanidad, los más amplios derechos democráticos para la inmensa mayoría de la población; potenciará y ofrecerá todos los medios al pueblo trabajador para su participación activa en todos los ámbitos de la vida política, económica, social, cultural, etc...

No obstante, entendemos que no existen las condiciones para abordar de forma inmediata la conquista de este objetivo, es decir, la mayoría de los trabajadores no sienten aun una auténtica necesidad del socialismo.

**PARTIDO DE LOS
TRABAJADORES**



Manuel Gracia



Joan Anton
Sánchez Carrate

Por eso, en el caso de España, consideramos que una vez establecida la democracia política, los enemigos de las transformaciones democráticas, económicas y sociales necesarias para resolver los problemas más candentes del pueblo trabajador serán el dominio del capital financiero y monopolista y el control imperialista.

Por tanto, será necesaria una alianza de todas las fuerzas políticas interesadas en ampliar la democracia y abordar las profundas transformaciones políticas y económicas de carácter antimonopolista y antiimperialista construyendo un Frente Democrático que incluya a la clase obrera, los campesinos, la pequeña burguesía, los intelectuales...

El triunfo de este Frente significaría el establecimiento de una nueva forma de Estado, la República Democrática, que sin ser aún el socialismo, aboliría las bases fundamentales en que se sustenta el capitalismo.

Esto, permitiría organizar democráticamente el Estado, garantizando la plena igualdad de derechos entre todas las naciones que configuran el Estado Español, las cuales gozarían de sus respectivos gobiernos e instituciones autónomas, declarándose oficiales cada uno de los cuatro idiomas que se hablan en el Estado en sus respectivas naciones. Se profundizaría en la democratización de todos los ámbitos de la vida del país a fin de que el pueblo trabajador participase activamente en la vida política, en la gestión del Estado y en la producción. Se pondrían los medios fundamentales de producción y cambio en manos del pueblo, lo cual permitiría enfocar la economía hacia el progreso social y se estaría en condiciones de solucionar los problemas más candentes del pueblo trabajador, no solamente en el terreno de la economía sino en el de la educación, sanidad, vivienda, transportes y comunicaciones, deporte, etc...

Ante las elecciones convocadas por el Gobierno Suárez el Comité Nacional de Catalunya de nuestro Partido propone la formación de un amplio Frente Electoral Democrático de las fuerzas obreras populares y nacionales en torno a la defensa de un programa acordado conjuntamente que de solución a las necesidades políticas, económicas y sociales, hoy más sentidas y candentes para la clase obrera y el pueblo.

Es evidente que el compromiso para el restablecimiento de la Generalitat puede ser el punto de partida para esta amplia alianza electoral ya que es una firme garantía de libertad progreso y democracia para el pueblo. En este sentido, las dos cuestiones vitales en torno a las cuales habría de girar el programa de este frente electoral serían: la conquista de un marco ampliamente democrático para el pueblo y la solución a la caótica situación económica de forma que no continúe descargándose, como hasta ahora, sobre las espaldas de los trabajadores.

**ANTE LAS
ELECCIONES**



Consuelo Gofri
Desoja



Rafael Núñez
Ruíz

Un programa de este tipo respondería a las demandas más urgentes del pueblo trabajador, ofreciendo soluciones claras, concretas y posibles a sus problemas de falta de libertad y de privaciones cada día más duras ante la crisis provocada por el capitalismo.

Los partidos políticos obreros, populares y nacionales han de ser conscientes de que en estas elecciones un programa electoral al servicio de los intereses de los trabajadores y de los sectores populares no puede ser ni nacionalista, ni socialista, ni comunista, porque de lo que se trata ahora es de si el futuro será o no democrático, de si recuperaremos o no las instituciones políticas catalanas, de si la solución a la crisis económica pasará por un programa de transformaciones económicas tal como reclaman los intereses del pueblo o por un plan de estabilización, tal como propone la derecha franquista.

Entendemos que es necesario presentar un frente común de todos los partidos y organizaciones obreras populares y nacionales porque si los diferentes partidos presentamos candidatos cada uno por su lado, pugnando por obtener votos, estaremos dispersando nuestra fuerza e influencia y, por tanto, favoreciendo el triunfo de la derecha más reaccionaria, que se presenta ya hoy unida y esta, además, favorecida por un sistema electoral hecho a su medida.

En definitiva, consideramos que no sólo es posible la formación de este amplio frente porque sobre el papel de los programas políticos no hay ningún impedimento para llegar a un programa electoral unitario sobre las bases que proponemos, sino que es absolutamente necesario para que a partir de las instituciones políticas catalanas se pueda dar solución a los problemas políticos y económicos más acuciantes para el pueblo trabajador.